JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRIJEZ-JDC-022/2025 Y TRIJEZ-JDC-023/2025

ACTORES: JOSÉ JUAN MENDOZA MALDONADO Y CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID.

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA ZACATECAS Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ÁNGEL YUEN REYES

SECRETARIA: NUBIA YAZARETH SALAS DÁVILA

Guadalupe, Zacatecas, a cinco de agosto de dos mil veinticinco¹.

Sentencia definitiva que **revoca** la resolución intrapartidaria dictada en el expediente 003/OJI/PRD-ZAC/2025, dónde se determinó la baja del padrón de afiliados del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas de José Juan Mendoza Maldonado y Camerino Eleazar Márquez Madrid, dado que la sustanciación de la queja contra persona, no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento.

GLOSARIO

Actores o promoventes:	José Juan Mendoza Maldonado y Camerino Eleazar Márquez Madrid.
Autoridad responsable o Dirección Estatal:	Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas.
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Medios:	Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas.
Órgano de justicia:	Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas.
PRD:	Partido de la Revolución Democrática Zacatecas.
Reglamento de disciplina:	Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas.

ANTECEDENTES

De los hechos narrados en el escrito de demanda, así como de las constancias que integran los autos del juicio ciudadano se advierte lo siguiente:

¹ En lo subsecuente, las fechas serán alusivas al presente año, salvo precisión expresa.

1. Queja partidista. El veinte enero, Juan Carlos de Santiago Santana, presentó queja contra persona para denunciar actos atribuibles a los actores, que presuntamente afectaron al PRD.

2. Resolución intrapartidista. El siete de febrero, al Órgano de Justicia, emitió resolución dentro del procedimiento de queja contra persona 003/OJI/PRD-ZAC/2025, donde determinó como sanción, dar de baja a los promoventes del padrón de afiliados del PRD.

2. Consulta de afiliación. El nueve de marzo, los actores realizaron la verificación de su registro en el Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, de la cual se hizo constar que se encontraban afiliados al Partido de la Revolución Democrática Zacatecas.

- José Juan Mendoza Maldonado desde el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve
- Camerino Eleazar Márquez Madrid desde el uno de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.

2. Baja del padrón. El cuatro de junio, los promoventes realizaron consulta en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados a los partidos políticos del Instituto Nacional Electoral, por lo que se percataron que sus claves de elector no se encontraban con estatus valido en los padrones de personas afiliadas.

3. Demandas. El diez de junio, los actores interpusieron juicios ciudadanos para controvertir su baja injustificada del padrón de afiliados, al considerar vulnerado su derecho político de afiliación.

4. Trámite de los juicios ciudadanos. El diez de junio, la Magistrada Presidenta ordenó registrar los juicios bajo las claves TRIJEZ-JDC-022/2025 y TRIJEZ-JDC-023/2025, así como turnarlos a la ponencia del Magistrado José Ángel Yue Reyes, para que determinara lo que en derecho correspondiera.

5. Radicación y requerimiento. El once de junio, se ordenó la radicación de los medios de impugnación en la ponencia señalada, por lo que se realizó un primer requerimiento de información a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

6. Recepción de informe y requerimiento. El veintiséis de junio, se tuvo por recibido el informe circunstanciado de la Dirección Estatal y derivado de sus manifestaciones, se requirió al Órgano de Justicia el expediente de queja contra persona 003/OJI/PRD-ZAC/2025.

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor tuvo por admitidos los juicios ciudadanos y determinó cerrar la instrucción al no quedar diligencias pendientes por practicar, por lo que quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia. Este Tribunal es competente para conocer los presentes medio de impugnación, al ser promovidos por dos ciudadanos que aducen la vulneración a su derecho político de afiliación, ante la baja del padrón de afiliados del PRD, sin mediar consentimiento o renuncia a la militancia de su parte a dicho instituto político.

Supuesto que actualiza la competencia de este Tribunal de Justicia Electoral, de conformidad con el marco normativo previsto en los artículos 42, primer párrafo, base A y B, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 6, primer párrafo, fracción VII y 17, primer párrafo, base A, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas; 8, segundo párrafo, inciso IV y 46 Bis de la Ley de Medios.

SEGUNDA. Acumulación. Este Tribunal estima que existen elementos para decretar la **acumulación** de los medios de impugnación, al existir **identidad** en la causa de pedir, pues en ambos se esgrimen agravios similares para controvertir su baja injustificada del padrón de afiliados del PRD.

Así, con el fin de garantizar la resolución expedita de los medios de impugnación, evitar la emisión de sentencias contradictorias y en atención al principio de economía procesal, de conformidad con lo previsto en los artículos 16 de la Ley de Medios y 64 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, lo procedente es acumular el expediente TRIJEZ-JDC-023/2025 al TRIJEZ-JDC-022/2025, al ser este el primero que se recibió y registró en este Tribunal, por lo que se deberá **glosar** copia certificada de la presente resolución a los autos del expediente acumulado.

TERCERA. Precisión de la autoridad responsable y acto impugnado

Como ha sido indicado en el proemio de la presente sentencia, la autoridad responsable es la Dirección Estatal, pues así lo señalaron los promoventes en el escrito inicial de demanda, dado que atribuyeron al PRD la baja definitiva del padrón de afiliados, sin tener certeza sobre el órgano responsable de tal determinación.

En el caso, si bien el acto impugnado es la baja del padrón de afiliados del PRD, del informe circunstanciado que rinde la Dirección Estatal, se advierte que dicha determinación deriva de la resolución dictada por el Órgano de Justicia donde se determinó la baja de los promoventes al resolver la queja 003/OJI/PRD-ZAC/2025, por lo que de manera excepcional, se tendrá como **acto impugnado dicha resolución intrapardista y como responsable al Órgano de Justicia.**

Ello es así, porque con independencia de que la determinación de la baja del padrón no es directamente atribuible a la Dirección Estatal, lo cierto es que no es motivo para dejar de analizar el presente asunto, pues materialmente la resolución intrapardista contiene las razones y fundamentos que ocasionaron la baja del padrón de afiliados, y como se ha dicho, tal determinación constituye el acto impugnado.

Bajo dicho panorama, no se considera necesario realizar un nuevo trámite de ley, si la Dirección Estatal al rendir su informe reconoció expresamente la baja del padrón y justificó dicho acto con la existencia de una determinación jurisdiccional partidista, de tal manera que sería ocioso ordenar un nuevo trámite al Órgano de Justicia si la baja ya está reconocida y acreditada por la Dirección Estatal.

En ese sentido, dado que existe reconocimiento del acto reclamado, se detalla el origen de la determinación y obran en autos las constancias del expediente de queja 003/OJI/PRD-ZAC/2025 remitidas por el Órgano de Justicia, este tribunal considera que cuenta con los elementos suficientes para dirimir la presente controversia, sin generar la postergación innecesaria de la resolución, procurando así la observancia del principio constitucional de justicia pronta y expedita.

CUARTA. Procedencia de los medios de impugnación

I. Causal de improcedencia

El Presidente de la Dirección Estatal hace valer como causal de improcedencia la extemporaneidad de los medios de impugnación, ya que la resolución jurisdiccional intrapartidaria fue publicada en los estrados del PRD el siete de febrero, por lo que los promoventes tuvieron conocimiento de las razones de su baja desde esa fecha, lo cual actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción IV del artículo 14 de la Ley de Medios.

Al respecto, esta autoridad considera que la causal invocada debe desestimarse, dado que según lo esgrimido por los actores en su escrito de demanda, en ningún momento tuvieron conocimiento de las razones o fundamentos para que se les diera de baja del padrón de afiliados, por lo que validar que el plazo de impugnación transcurrió en los cuatro días hábiles posteriores al siete de febrero, implicaría asumir que se tuvo conocimiento pleno y efectivo de la resolución jurisdiccional intrapartidista que determinó dar de baja a los promoventes, actualizando así un vicio lógico de petición de principio.

Se afirma lo anterior, porque el desconocimiento de las razones para darlos de baja del padrón de afiliados es precisamente el agravio de los actores, lo cual configura el estudio de fondo que realizará este tribunal para determinar si existe o no una vulneración a sus derechos políticos, de ahí que, acoger la pretensión de la responsable, dejaría sin pronunciamiento la controversia central que se presenta ante este órgano jurisdiccional a partir de lo que es materia de cuestionamiento.

En ese sentido, se debe considerar válida la afirmación de los actores cuando refieren que el cuatro de junio tuvieron conocimiento de que ya no contaban con estatus válido como afiliados del PRD y computar el plazo de impugnación a partir del cinco siguiente, concluyendo el día diez de junio, por lo que si la demanda se presentó el día diez, se encuentra dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 12 de la Ley de Medios.

II. Verificación de requisitos de procedencia. Se estima que la demanda reúne los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 12, 13, 46 Bis, y 46 Ter, fracción III de la Ley de Medios, atendiendo a las siguientes consideraciones.

- a) **Forma.** Las demandas se presentaron por escrito, en ambas se incluye el nombre y firma de quien promueve, se identifica el acto reclamado y la

Autoridad Responsable, se mencionan los hechos y agravios que le causa, así como su pretensión.

- b) Oportunidad.** Este requisito también se cumple, de conformidad con el análisis efectuado en el apartado anterior, al no actualizarse la extemporaneidad aducida por la Autoridad responsable.
- c) Interés jurídico y personería.** Los actores cuentan con interés para interponer los presentes juicios de la ciudadanía, al estimar que la determinación de darlos de baja del padrón de afiliados del PRD vulneró sus derechos político-electorales. Asimismo, su personería se desprende de autos.
- d) Definitividad.** Se satisface el requisito, en virtud de que en el caso no procede algún medio de defensa previo que deba agotarse antes de acudir a este órgano jurisdiccional.

QUINTA. Estudio de fondo

I. Planteamiento del caso. Los promoventes señalan como motivo de inconformidad la **indebida** baja y cancelación de su registro como afiliados al padrón del PRD, por lo que se vulnera su derecho libre de asociación en materia política, contemplado en el artículo 35, fracción III de la Constitución Federal.

Partiendo de ello, señalan que el ejercicio de la mencionada libertad política se concreta a través de los partidos políticos, por lo que la afiliación a estos es un derecho fundamental de contenido más específico que comprende no solo la potestad de formar parte de los partidos y asociaciones políticas, sino el derecho de conservar esa afiliación e incluso, desafiliarse voluntariamente.

Además, precisan que no se justifica la baja del padrón porque nunca se formalizó una renuncia de su parte mediante escrito con firma autógrafa y copia legible de credencial de elector, tampoco solicitaron al Instituto Nacional Electoral la solicitud de ser dado de baja del PRD, ni fueron notificados de estar registrados en otro partido político o de alguna resolución jurisdiccional que les impidiera seguir afiliados.

En virtud de la sustanciación del presente juicio, los actores tuvieron conocimiento del procedimiento intrapartidario 003/OJI/PRD-ZAC/2025, al

advertir la notificación por estrados de la recepción de documentación recibida en este Tribunal por parte del Órgano de justicia.

El desconocimiento de la circunstancia que propicio su baja del padrón se corrobora con la solicitud que hicieron a este tribunal en fecha tres de julio, respecto al expediente partidista señalado.

Conforme a ello, los actores presentaron como prueba superviniente la resolución RCG-IEEZ-004/X/2025, donde se determinó sobre la procedencia constitucional y legal de las subsanaciones realizadas a las deficiencias detectadas en el Estatuto del PRD y a su vez se señaló que en la resolución RCG-IEEZ-003/X/2025 del veintiocho de abril, fue aprobada la conformación del Órgano de Justicia, por lo que estiman el procedimiento intrapartidario carece de validez y ninguna actuación hecha con anterioridad a esa fecha es válida.

Por su parte, la autoridad responsable manifiesta que la decisión del Órgano de Justicia de darlos de baja del padrón de afiliados se basó en que los actores incurrieron en faltas al estatuto del PRD, asumiéndose como dirigentes del partido, por lo que se les aplicó la sanción establecida en el artículo 89, inciso d) del estatuto.

Ahora bien, de las constancias del expediente se advierte que el procedimiento de queja contra persona fue iniciado por Juan Carlos de Santiago Santana, quien acorde a los antecedentes de la resolución partidista, presentó la queja **el veinte de enero**, aduciendo que Camerino Márquez Madrid se presentó como presidente del PRD **el uno de febrero**; así mismo, se señaló a José Juan Mendoza Maldonado como probable responsable del delito de abuso de confianza en perjuicio de los integrantes de la Dirección Estatal

Así, al analizar los hechos motivo de la queja, la resolución intrapartidista señala que los actores cometieron actos de negligencia y abandono, dañando las funciones y esencia del partido, por lo que se determina destituirlos del cargo que en el momento se encontraban desempeñando, pero aplica la sanción de darlos de baja del padrón, suscribiendo la resolución Pablo Eduardo Juárez Hernández, como Órgano de Justicia.

En ese contexto, esta autoridad advierte que al no conocer la existencia de la queja y resolución intrapartidista, las demandas de los actores no combaten frontalmente las cuestiones relacionadas con el procedimiento interno, no

obstante, ello no imposibilita el estudio del agravios hecho valer, pues acorde a la línea judicial de la Sala Superior, para tenerlo por debidamente configurado, es suficiente con expresar la causa de pedir, precisando la lesión o agravio a su esfera de derechos, para que con base en los preceptos jurídicos aplicables, este Tribunal se ocupe de su estudio².

Aunado a lo anterior, conforme a la línea jurisprudencial emitida por la Sala Superior, este órgano judicial ha sostenido que los escritos de demanda deben analizarse en su integridad con el objeto de determinar con exactitud la intención de quien promueve³.

En ese tenor, los actores precisan con claridad la **causa de pedir**, que en el caso es la baja injustificada del padrón de afiliados del PRD; señalan el **agravio** que le causa tal determinación, siendo la violación a su **derecho de afiliación** en materia política, por lo que su **pretensión** es que se reestablezca su registro como afiliados del PRD; circunstancias que innegablemente conducen a realizar el estudio razonado de la fundamentación y motivación de la sentencia partidista que restringió el derecho político electoral de los actores.

III. Cuestión jurídica a resolver. Ante los planteamientos expuestos, este Tribunal debe determinar si la resolución intrapartidista dictada por el Órgano de Justicia restringió indebidamente el derecho político de afiliación de los actores, o si por el contrario, se encuentra apegada a derecho.

IV. Determinación jurisdiccional. Este tribunal considera que le asiste la razón a los promoventes y debe revocarse la resolución intrapartidaria dictada dentro de la queja contra persona identificada con el expediente 003/OJI/PRD-ZAC/2025, pues el Órgano de Justicia no respetó las formalidades esenciales del procedimiento

a) Marco normativo

- Debido proceso

² Criterio contenido en la Jurisprudencia 3/2000, de rubro: **AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.**

³ En términos de la Tesis de Jurisprudencia 4/99, de rubro **MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.**

Los artículos 14 segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Federal disponen entre otras cuestiones, las garantía de seguridad jurídica y audiencia en todo proceso legal, mismas que están obligadas a cumplir todas las autoridades del país antes de realizar un acto privativo de derechos de la ciudadanía, pues estas garantía resultan indispensables para garantizar la defensa adecuada antes de la afectación a cualquier derecho⁴.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las formalidades se traducen en el cumplimiento de los siguientes elementos⁵:

1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas.
3. La oportunidad de alegar.
4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

De tal suerte que la inobservancia de alguno de ellos, dejaría en estado de indefensión al ciudadano afectado con el acto de privación.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido que el artículo 14 Constitucional tiene dos ámbitos de aplicación⁶:

- El primero es precisamente el núcleo duro constituido por los requisitos previamente establecidos que se ocupa del ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional que, de ser procedente, llevaría a un acto privativo en su contra, por lo que se le debe otorgar la posibilidad de una **defensa efectiva**.
- El segundo ámbito de aplicación se advierte desde la perspectiva de quien acude a la instancia jurisdiccional para reivindicar un derecho, el cual, de no dirimirse adecuadamente, podría causarle una afectación. A partir de ello, el debido proceso se entiende como el derecho humano que permite a las y los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer

⁴**Artículo 14.** (...) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)"

⁵ Tesis de Jurisprudencia P./J. 47/95, localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133. Registro digital: 200234

⁶ Tesis 1ª. CCLXXVI/2013 (10ª), de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS", localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, página 986. Registro digital: 2004466

valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, lo que exige un procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo a sus pretensiones.

A nivel convencional, este derecho fundamental se reconoce en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues se previenen las garantías judiciales mínimas de toda persona en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, así como la posibilidad de acudir a otros tribunales o instancias que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales.

Conforme a lo señalado, cualquier acto de autoridad que tenga como efecto la privación de algún derecho, sin que la persona afectada tuviese la posibilidad de realizar una defensa adecuada y oportuna, transgrede el derecho de audiencia del que goza toda persona.

- Procedimiento de queja contra persona

Por lo que se refiere a la normativa interna del PRD, el estatuto previene⁷ que el Órgano de Justicia será el responsable de la justicia intrapartidaria, de decisión colegiada y observará en su función los principios de autonomía, independencia, certeza jurídica, imparcialidad, objetividad, contradicción, legalidad, convencionalidad, confidencialidad, igualdad de las partes y exhaustividad otorgando todas las garantías judiciales derivadas de derechos humanos.

Así mismo, señala que las infracciones al estatuto y reglamentos del partido, podrán ser sancionadas, con diversas sanciones, entre ellas, la baja del padrón de personas afiliadas y para conocer este tipo de controversias, contempla la queja como procedimiento de justicia intrapartidaria, en el que se seguirán las etapas de presentación, substanciación, garantía de audiencia y resolución.

Por su parte, el Reglamento de disciplina establece cómo se tramitará el procedimiento de queja contra persona, el cual se puede resumir de la siguiente forma⁸:

⁷ Artículos 83, 89 y 93.

⁸ Artículos 42, 63, 66, 67, 70,72, 73 y 75.

1. El escrito de queja deberá presentarse por escrito, cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo 42 del Reglamento de disciplina, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquel en que aconteció el acto que se reclama.
2. Las quejas serán radicadas de inmediato para la sustanciación del asunto.
3. Satisfechos los requisitos de procedibilidad se dictará auto de admisión y se ordenará correr traslado con el escrito inicial y sus anexos a la parte presuntamente responsable para que en un término de cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga.
4. Transcurrido el plazo anterior, el Órgano de Justicia señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, donde se desahogarán las pruebas admitidas.
5. Desahogadas las pruebas, las partes podrán formular alegatos de forma verbal o por escrito y se procederá al cierre de instrucción.
6. Cerrada la instrucción, se ordenará se realice el proyecto de resolución en un plazo máximo de diez días.
7. Notificados todos los órganos del partido que deban intervenir en la ejecución, tienen la obligación de informar sobre su cumplimiento al Órgano de Justicia, en un plazo no mayor de tres días hábiles.
8. Toda resolución aprobada por el pleno del órgano de justicia deberá contener el resumen de los hechos y los puntos de derecho controvertidos.

b) Caso concreto

El estudio de la competencia de la autoridad emisora del acto reclamado constituye una cuestión preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio por las autoridades jurisdiccionales⁹ y si de la revisión del acto impugnado se advierte incompetencia de la autoridad emisora, la consecuencia jurídica es la **invalidez** total del acto.

En ese sentido, los actores aducen que si fue hasta el veintiocho de abril que se conformó legalmente el Órgano de Justicia, la resolución intrapartidaria carece de validez porque fue emitida por una persona sin facultades para ello.

⁹ Criterio sostenido en la Jurisprudencia 1/2013, emitida por la Sala Superior, de rubro: "COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", localizable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 11 y 12.

En efecto, la resolución intrapartidaria está suscrita por Pablo Eduardo Juárez Hernández, no obstante, de la parte considerativa de la resolución RCG-IEEZ-003/X/2025 se advierte que el mencionado ciudadano tiene el carácter dentro del PRD como Director Jurídico en Funciones de Órgano de Justicia Intrapartidario.

Aunado a lo anterior, el artículo sexto transitorio del Estatuto previno que durante el periodo transitorio, es decir, de conformación de los órganos partidistas, el órgano de justicia intrapartidario estaría a cargo de la persona titular de la Dirección Jurídica a efecto de garantizar la justicia intrapartidaria y evitar dilaciones innecesarias, por lo cual, se considera que la resolución partidista no fue emitida por persona sin facultades para ello.

Sin embargo, del estudio realizado al procedimiento de queja contra persona que derivó en la determinación de pérdida de afiliación de los actores, este Tribunal advierte una serie de irregularidades, siendo la más importante, la forma en que presuntamente se dio a conocer a los promoventes la existencia de una queja en su contra y la realización de la audiencia de ley.

A efecto de ilustrar mejor las diligencias realizadas por el Órgano de Justicia, se inserta la siguiente tabla con la relación cronológica de las actuaciones relativas a la notificación de la queja y de la fecha en que tendría lugar la audiencia de ley, elemento esencial de todo procedimiento para garantizar el derecho de audiencia:

JOSÉ JUAN MENDOZA MALDONADO		CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID	
Jueves 23 de enero	Primer citatorio	Jueves 23 de enero	Primer citatorio
Viernes 24 de enero	Primera notificación	Viernes 24 de enero	Primera notificación
Observaciones: el primer citatorio no indica el nombre de la persona que recibe ni el medio de identificación, solo da una descripción física de la misma; en tanto que, la primera notificación señala que se encuentra presente José Juan Mendoza Maldonado, quien se identifica con credencial de elector, sin indicar la clave o el folio y asentando que se niega a firmar de recibido.		Observaciones: el primer citatorio no indica el nombre de la persona que recibe ni el medio de identificación, sólo da una descripción física de la misma; en tanto que, la primera notificación señala que se encuentra presente Camerino Eleazar Márquez Madrid, quien se identifica con credencial de elector, sin indicar la clave o folio y asentando que se niega a firmar de recibido.	
Domingo 26 de enero	Segundo citatorio	Domingo 26 de enero	Segundo citatorio
Lunes 27 de enero	Segunda notificación	Lunes 27 de enero	Segunda notificación

JOSÉ JUAN MENDOZA MALDONADO		CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID	
Observaciones: el segundo citatorio no indica el nombre de la persona que lo recibe ni el medio de identificación, sólo da una descripción física; en tanto que, no se indica el nombre de la persona que recibe la segunda notificación, señalando que es vecino de la misma calle y dando una descripción de su físico.		Observaciones: en el segundo citatorio se asienta que quien recibe es Camerino Eleazar Márquez Madrid y se niega a recibir, no se señala medio de identificación, aunado a que el citatorio no está firmado por notificador, encargado o integrante del órgano de justicia; en tanto que, la segunda notificación se practica con una persona que iba saliendo del domicilio, que no se identifica, por lo que se describen sus características físicas.	
Martes 28 de enero	Tercer citatorio	Martes 28 de enero	Tercer citatorio
Miércoles 29 de enero	Tercera notificación	Miércoles 29 de enero	Tercera notificación
Observaciones: el tercer citatorio, es recibido por José Juan Mendoza Maldonado, no señala el medio de identificación de la persona y asienta que se negó a firmar de recibido; en tanto que, la tercer notificación es atendida por una persona que no se identifica y únicamente se da su descripción física pero dijo ser conocido del interesado.		Observaciones: el tercer citatorio es recibido por Camerino Eleazar Márquez Madrid, no señala el medio de identificación y asienta que se negó a firmar de recibido; en tanto que, la tercera notificación es atendida por Camerino Eleazar Márquez Madrid, sin señalarse la clave de elector o folio de la credencial de elector con que se identificó, asentando que se niega a firmar de recibido.	

De lo reseñado, es importante destacar que en la práctica de todas las diligencias, las personas que atendieron los citatorios o notificaciones, no proporcionaron sus nombres o el medio de identificación respectivo y únicamente se hizo una descripción de su físico; mientras que cuando se tuvo la presencia de los interesados, en todos los casos de negaron a firmar de recibido.

Aunado a ello, existen citatorios que son atendidos precisamente por la persona que se pretende notificar, por lo que no resulta lógico que se les cite para recibir la notificación correspondiente al día siguiente si, teóricamente, se encuentran presentes en la diligencia.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que el segundo citatorio se entregó en día inhábil, esto es, el domingo veintiséis de enero y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de disciplina, son días hábiles todos con excepción de los sábados y domingos, sin que en el particular, la temática estuviera relacionada con proceso electorales; además, en el caso específico de Camerino Eleazar Márquez Madrid, el segundo citatorio no está firmado por notificador, encargado o integrante del Órgano de Justicia.

Por su parte, el Reglamento de disciplina contempla la notificación personal a las partes del emplazamiento, la celebración de la audiencia de ley y la resolución definitiva, lo cual guarda estrecha relación con el primer elemento esencial del procedimiento, relativo a notificar el inicio de cualquier proceso jurisdiccional que pueda tener como consecuencia la privación de derechos.

Bajo ese contexto, no se genera convicción y certeza en este Tribunal de que los actores hayan tenido pleno conocimiento de la queja interpuesta en su contra y por consiguiente, se considera que no estuvieron en aptitud ejercer debidamente su garantía de audiencia, elemento imprescindible en el caso, si se tiene en cuenta que la consecuencia de la queja contra persona resultó en la privación de su derecho político de afiliación.

VI. Efectos

Toda vez que no se siguió el debido proceso en la queja intrapartidista que tuvo como consecuencia la baja de los actores del padrón de afiliados del PRD, lo conducente es determinar lo siguiente:

1. **Revocar** la resolución dictada por el órgano de justicia dentro del expediente 003/OJI/PRD-ZAC/2025.
2. **Restituir** a los promoventes en el uso y goce del derecho de afiliación en materia política, por lo cual, **se vincula** al órgano de afiliación del PRD, para que dentro del plazo de **tres días**, registre a los actores en el padrón de afiliados y lista nominal del mencionado instituto político.
3. Hecho lo anterior, el órgano de afiliación deberá **informar** lo conducente a este Tribunal, dentro de las **veinticuatro horas** posteriores a que ello ocurra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se **acumula** el juicio de la ciudadanía TRIJEZ-JDC-023/2025 al TRIJEZ-JDC-022/2025, por lo que deberá glosarse copia certificada de la resolución a los autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Se **revoca** la resolución intrapartidaria dictada por el Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas, dentro del expediente 003/OJI/PRD-ZAC/2025.

TERCERO. Se **restituye** a José Juan Mendoza Maldonado y Camerino Eleazar Márquez Madrid en el uso y goce de su derecho político de afiliación.

CUARTO. Se **vincula** al órgano de afiliación del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas para que actúe acorde a lo señalado en el apartado de efectos del presente fallo.

***Notifíquese** en términos de Ley. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.*

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, las Magistraturas que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y **da fe**. Doy fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

GLORIA ESPARZA RODARTE

MAGISTRADA

MAGISTRADA

ROCÍO POSADAS RAMÍREZ

TERESA RODRÍGUEZ TORRES

MAGISTRADO

JOSÉ ÁNGEL YUEN REYES

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

MARICELA ACOSTA GAYTÁN